**JUZGADO PRIMERO (1º) DE FAMILIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
DE BOGOTÁ, D.C.**

Veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022)

**Ref.: ACCIÓN DE TUTELA DE INGRID KATHERINE CELY MARÍN EN
CONTRA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
(2022-00007).**

Revisado el texto del libelo, encuentra el despacho que aunque la accionante también dirige la demanda en contra de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, lo cierto es que no le reprocha conducta alguna a ésta última, pues destina las líneas de su escrito a relatar la condición médica que presenta su hijo O.J.C.C., los procedimientos quirúrgicos y tratamientos a los que ha sido sometido, y la necesidad que tiene de que el menor cuente con el servicio de enfermería durante varias horas del día, para que ella pueda emplearse en alguna actividad económica que le reporte ingresos económicos.

En efecto, la demandante no señala que la aludida entidad pública haya incurrido en una acción u omisión que, por la vía de la acción de tutela, deba repararse y la pretensión de la solicitud de amparo se encamina, principalmente, a que la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR le proporcione el servicio de enfermería a su vástago y que los exámenes que éste último requiera, se practiquen, en todos los casos, en su lugar de residencia.

Así las cosas, no queda otra opción más que concluir que la vinculación de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD es solo aparente, pues el particular que, eventualmente, estaría vulnerando los derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la igualdad y a la seguridad social del niño O.J.C.C., y al mínimo vital y móvil de la actora, sería la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR, como acaba de verse.

En torno a la vinculación aparente de los demandados en tutela, ha sentado la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia:

“Del relato fáctico del escrito de tutela se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporación para tramitar el asunto, pues el auxilio

constitucional involucra exclusivamente a la Constructora Hernández Gómez –HG- y a la Curaduría Urbana Número Uno de Bucaramanga, quienes ostentan la calidad de personas jurídicas de derecho privado, debiendo conocer de su trámite los jueces municipales, conforme a lo previsto en el inciso 3º, numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.

“La vinculación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las Superintendencias de Industria y Comercio y Financiera de Colombia, es apenas aparente, como quiera que la Constructora Hernández Gómez –HG- y la Curaduría Urbana Número Uno de Bucaramanga fungen como las únicas implicadas por el presunto incumplimiento en la construcción de la citada obra y las irregularidades relacionadas con las licencias otorgadas respecto a aquélla, siendo éstas las llamadas a pronunciarse.

“Sobre el particular, ha señalado esta Sala:

‘[N]o puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisión que soporte su vinculación a ese trámite, ni se precise de modo claro y directo cómo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria (...)’ (ATC 1880-2015 de 16 de abril de 2015 M.P.: doctor LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA).

Por su parte, el numeral 1 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, en la redacción del artículo 1º del Decreto 333 de 2021, establece que “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y **contra particulares** serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, **a los Jueces Municipales**”.

En ese orden de ideas, el Juez constitucional competente sería el de categoría municipal de Bogotá. Entonces, en atención a la razón ya dicha, se dispondrá la remisión del expediente a los Jueces de categoría municipal de la Capital, para que conozcan la presente acción de tutela.

Se aclara que para la firma de esta decisión se acudió a lo señalado tanto en el artículo 11 del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, como en el artículo 22 del Acuerdo No. PCSJA20-11567 de 5 de junio del mismo año

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO PRIMERO (1º) DE FAMILIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ, D.C.,

RESUELVE

PRIMERO: ORDENAR que la acción de tutela que promueve la señora **INGRID KATHERINE CELY MARÍN** en contra de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR**, sea remitida, **inmediatamente**, al Centro de servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles y de Familia de Bogotá, para que sea repartida entre los Juzgados de categoría municipal de dicha ciudad, en atención a las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Comuníquese a la accionante, por el medio más expedito que sea posible y dejando las constancias del caso, lo aquí dispuesto.

CÚMPLASE,

Firmado Por:

Ricardo Adolfo Pinzon Moreno
Juez
Juzgado Circuito De Ejecución
Sentencias 001 De Familia
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

2b28b1254ac24f7d5cb673d1811502cf0c8c421259ebfcee4dabf26c0d86f9a1

Documento generado en 27/04/2022 12:54:58 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>